

EL OCASO DE LOS CACICAZGOS: HISTORIA DE LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO HONDUREÑO

RODOLFO PASTOR

LOS ACTORES Y LA TRAMA

EL SISTEMA POLÍTICO HONDUREÑO no es el mejor de Centroamérica. El tico ha mostrado mayor amplitud, estabilidad y arraigo más profundo. Pero aparte esa excepción de siempre, el hondureño es el único sistema político centroamericano que ha logrado sobrevivir, con legitimidad e incluso con alguna posibilidad de desarrollo, a la agitada historia regional del último medio siglo. Su crisis parece inminente y se tambalea, pero se mantiene de pie, y conserva, de manera sorprendente, rasgos muy antiguos de su evolución histórica. Pese a múltiples esfuerzos por abrirlo, creando nuevos partidos, por ejemplo, este sistema sigue siendo por hoy bipartidista en la práctica. Gira en torno a dos partidos tradicionales: el liberal (colorado) y el nacionalista (azul).

En realidad, los nombres de ambos partidos resultan engañosos; ninguno de ellos es lo que dice ser; ambos tienen una definición ideológica vaga. Ambos partidos tradicionales descienden del partido liberal decimonónico, del que fueron disidentes los fundadores del "nacionalismo". No hay un conservadurismo declarado. (El partido conservador desapareció en Honduras desde el siglo pasado, probablemente por la debilidad política de la Iglesia local y del grupo social que podía aspirar a conservar su status¹.) Pero tampoco hay ya auténtico liberalismo. Frente a la sobrevivencia de estos personajes, hoy resultan evidentes el descontento generalizado de las bases y la emergencia de nuevos actores políticos. Unos y otros se preparan ahora para las elecciones que deben realizarse en 1985. Aquí me propongo colocar la crisis política actual en un proceso histórico y luego diagnosticar teóricamente el problema.

LOS NOMBRES Y LOS SUCESOS. 1900-1980

La conformación de los partidos tradicionales se remonta a la época de las formas liberales de fines del siglo pasado (1877-1883), las de Marco Aurelio

¹ La escasa polarización socioeconómica de la época colonial debió retroceder aún más en el contexto del aislamiento y la recesión económica postindependentista. En Honduras no hay aristocracia.

Soto y Ramón Sosa, padres del liberalismo actual. En comparación con los reformistas liberales de otros países, los hondureños hicieron menos daño. Modernizaron las leyes para fomentar la inversión y mejoraron las comunicaciones, sentando así las bases de la ulterior incorporación de la economía hondureña (en particular la costeña) al mercado mundial mediante la exportación de materias primas: el oro amarillo de las montañas y el oro verde de la costa. Al mismo tiempo, los reformistas propiciaron la penetración de intereses extranjeros mediante irreflexivas concesiones económicas con las que buscaban el desarrollo capitalista del país. Finalmente, impulsaron el proyecto unionista de su protector, el dictador liberal de Guatemala.

El "nacionalismo" surgió poco después (1906) como una reacción ante las consecuencias secundarias de esa política y, en particular, frente a la influencia externa, que una facción disidente de los liberales concebía como una amenaza a la soberanía. Pero los fundadores del nacionalismo se volvieron muy pronto los principales aliados del capital estadounidense. En efecto, Manuel Bonilla (abogado y ganadero de Oriente), el fundador del Partido Nacional, fomentó el desarrollo de las compañías bananeras con cuyo apoyo depuso al presidente Dávila.² Éstas lo incitaron a una guerra fronteriza —supuestamente nacionalista, en realidad fratricida— con Guatemala, sobre el Valle de Motagua, y con Nicaragua, sobre Mosquitia. Así, el nacionalismo encubría la protección de intereses privados y colocaba a la nación al servicio de las rivalidades entre las compañías.

Después del interludio democrático representado por la alternancia en el poder de ambos partidos entre 1920 y 1933,³ el general Tiburcio Carías Andino (comerciante y ganadero del interior, epónimo del nacionalismo) subió al poder, venciendo en 1933 a los tres contrincantes liberales que se dividieron el voto colorado. El general Carías se perpetuó en el poder con el beneplácito de las compañías fruteras, de cuyos intereses se volvió en el principal guardián.

Las compañías estadounidenses apoyaron materialmente la consolidación de la dictadura veinteañera de Carías. A cambio, éste las protegió y aplacó el descontento generalizado a raíz de la caída de los precios del banano, los incumplimientos de contratos y los despidos consecuentes, precipitados por la Gran Depresión. Carías utilizó para ese fin el nuevo ejército profesional hondureño. La represión de los años subsiguientes coincide con el sometimiento del movimiento social campesino en El Salvador por el general Martínez, y con las imposiciones dictatoriales de Ubico en Guatemala y Somoza en Nicaragua. Destaca de esa historia la intercomunicación de la vida pública entre los países del área. Se conforma así una alianza regional de dictadores que se apoyan mutuamente en lo militar y reciben el apoyo del capital y del gobierno

² La relación entre Manuel Bonilla, Zemurray, Zam "the banana man" es uno de los ejemplos más conocidos de "cooperación" entre políticos centroamericanos y empresarios estadounidenses.

³ Década en que el auge bananero llega a su máximo esplendor y en la cual se enfrentan colosos políticos de la talla de Paz Barahona y Mejía Calindres, demócratas probados de uno y otro partido.

estadunidense. La represión obliga a la clandestinidad. Los obreros protegen a los guerrilleros liberales en los campos bananeros; la aviación de Carías los bombardea. Nace el ejército para sofocar la resistencia liberal. Así se gesta la tradición partidaria de los militares, su antagonismo tradicional al liberalismo y la conexión militar de los nacionalistas, hechos que marcan la política nacional hasta nuestros días.

De esta manera cristaliza también, sin embargo, el poder electoral de los liberales en la Costa Norte, el área que en adelante tendría el mayor dinamismo demográfico, económico y político. Marginados del poder, los liberales de los años treinta y cuarenta abrazan las causas populares —en particular las de los obreros— contra la dictadura, y se hacen fama de “progresistas”. Para 1944 se precipita un movimiento de revuelta no desligado del movimiento revolucionario en Guatemala. La oposición gravita naturalmente hacia el liberalismo. Carías, por su parte, se siente muy seguro; en plena guerra fría goza del respaldo estadunidense. Responde con mano dura: cárcel y palos, exilio y ley fuga, dependiendo del caso y la persona. El 6 de julio de ese año, la tropa dispara a una manifestación cívica antirreeleccionista en la principal avenida de San Pedro Sula, próspera capital norteña. Actos, percepciones, reacciones espontáneas, galvanizan una nueva conciencia ciudadana. Es difícil seguir defendiendo al dictador contra una sordomuda indignación consensual y comienza el desgaste del régimen.

Poco después, la rebelión suma a obreros, estudiantes, profesionistas y comerciantes contra los extranjeros y el dictador. En el contexto internacional, la caída de Ubico debilita a Carías. Estados Unidos no quiere otra revolución como la de Guatemala. En el país, la prepotencia y rigidez del cacique de Zambrano le ha granjeado enemigos en su propio partido; los militares manifiestan por primera vez ambiciones propias. Su historiador favorito le aconseja al dictador entregar el poder antes que sea tarde.

Obligado por esas circunstancias, Carías llama a elecciones. Su candidato, el abogado Juan Manuel Gálvez⁴ (1949-1954), capitaliza la desorganización liberal, hace campaña a lomo de mula por todo el país y se gana el afecto y los votos de la mayoría. Al verse perdido, el candidato liberal, Zúñiga Huet, intenta armar una revuelta y jura que no alcanzarán los pinos —en Honduras abundantes— para colgar a los nacionalistas y militares, pero no consigue más que salir exiliado a México. Por contraste con su mentor y patronos, de los que pronto se independiza para sorpresa de todos, Gálvez otorga una amnistía, llama a los que exilió Carías, les concede garantías y respeta las libertades de prensa y organización. Gobierna con un beneplácito generalizado, salvo el de los guatemaltecos, cuyo gobierno revolucionario ayudaba a subvertir, y favorece la solución de la gran huelga bananera de 1954 reivindicando los reclamos obreros. La oposición liberal se organiza bajo el techo de la legalidad y cobra fuerza de modo que, cuando el Partido Nacional lo empuja al fraude

⁴ Gálvez había sido el representante legal de las fruterías, pero demostró más tarde “ser su propio hombre” y no estar comprado por ellas ni por nadie.

en la sucesión, Gálvez dimite pretextando su salud (“el mal de Panamá”) y emigra. Se hace cargo del gobierno el vicepresidente Julio Lozano Díaz (1954-1956), abogado, empresario capitalino y ex-ministro de Carías, quien se prolonga en el poder y organiza con los caríistas el Partido de Unidad Nacional (PUN) antes de convocar a una elección escandalosamente fraudulenta.

En octubre de 1956 se instala en el poder una junta militar encabezada por el popular teniente Roberto (Bobby) Gálvez, hijo de Juan Manuel, y en la cual participa —en su *début* político— el teniente advenedizo Oswaldo López Arellano. Se trata de la primera incursión de los militares como profesionales⁵ en la política, y el golpe, justificado como una respuesta al fraude público, tenía por un lado la legitimidad que le daba el apoyo del Partido Liberal defraudado y, por otro lado, la que le daba la inmediata convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente. Como precedente, de cualquier forma, resultaba ominoso.

Entra entonces al escenario político Ramón Villeda Morales, pediatra capitalino y líder carismático del liberalismo, que se hace llamar —cariñosamente— “Pajarito”. El doctor Villeda Morales abandera la lucha electoral contra un Partido Nacional dividido entre “punpuneros” y “galvistas”. Al son de “La Calandria” y otros ritmos popularizados por la radio, se le cantan canciones al “Pajarito pechito rojo”. Sin antagonizar a los militares, Villeda Morales capitaliza la nueva popularidad liberal en la costa y, en una escala nunca vista, hace política pública, de masas, sobre todo urbana, política moderna con un programa ideológico de reformas sociales. Consigue al mismo tiempo el apoyo de los caciques liberales del interior. Su popularidad es arrasadora. La constituyente, dominada por los diputados liberales, lo elige presidente en 1957. El pueblo recibe la noticia con euforia. El PUN desaparece *ipso facto*.

Hay que reconocer sus méritos; Villeda Morales fue un presidente democrático y un hombre de Estado con chispa y clase. Repetidamente convocaba en palacio a “juntas de notables”, a quienes hacía sentirse importantes y de quienes conseguía un amplio apoyo. Se rodeó de gente competente para la tarea de gobernar. Fue un buen administrador; llevó a feliz término un extenso programa de obras públicas (escuelas, puentes, carreteras) y promovió reformas que aún tienen vigencia un cuarto de siglo después, particularmente en lo laboral. Con su elección se inaugura un segundo periodo de reformas liberales, paralelo al de Soto y Rosa, reformas modernizantes sin demagogia. Por otro lado, Villeda Morales supo tratar a sus opositores, los militares incluso, ganándose su respeto cuando no su cariño.

Los intereses creados impidieron que algunas de sus reformas se materializaran de inmediato. La Alinza para el Progreso, con la que coincidió su régimen y en la cual el “Pájaro” y muchos otros depositaron demasiadas esperanzas, resultó efímera y engañosa en tanto que disponía de recursos insuficientes en relación con sus metas y con el problema social acarreado por la moderni-

⁵ Hasta entonces, los generales presidentes o candidatos habían sido militares de cerro, obligados a pelear por circunstancias o ambiciones y sin entrenamiento para ese fin.

zación económica latinoamericana. Pero uno vivía el cambio y la esperanza. La economía crecía al parejo de la organización popular y la clase media. Fue un error, quizá un error obligado por los nexos partidistas del estamento militar, crear una policía armada (la Guardia Civil) que ofreciera una mínima garantía contra las asonadas y madrugonas, una policía inevitablemente política cuyos desmanes acarrearían vergüenza infinita. Hubiera sido mejor profesionalizar el ejército. El “Pájaro”, además, traicionó a la izquierda que le había ayudado a conseguir apoyo obrero. De cualquier forma, no prosperó ni la intentona de golpe ni el movimiento aventurero del coronel Armando Velázquez Cerrato (nacionalista carismático), cuya estación de radio clandestina tocaba incesantemente la Marcha del Río Quay, llamando a los ciudadanos prominentes para que se sumaran a los alzados en la montaña. “Pajarito” conservó hasta el final una inmensa popularidad dentro del partido, entonces en su apogeo, y conservó, casi hasta el final, la fidelidad de las fuerzas armadas y el apoyo de Washington.

Demasiadas cosas dependían, sin embargo, de la cordura y la habilidad personal de Villeda Morales. Y ese tipo de dependencia parece ser tan mala para las personas como para los países. El problema planteado entonces fue el de la sucesión. Muchos albergaban ambiciones y el entonces presidente del Congreso, Modesto Rodas Alvarado, logró cooptar la red caciquil encarnada en el Congreso, sobre la que seguía apoyada la estructura del Partido Liberal, en aquel momento invencible. Tal vez a Villeda Morales le picó el gusanito de la ambición (¿quién es inmune?) y pensó dejar que las cosas siguieran el curso que llevaban hasta convertir su propia reelección (forzosamente indirecta o ilegal) en el último recurso o la única solución posible. Pero él mismo había abierto mucho el sistema como para imponerse.

Cuando, a sabiendas de que los militares vetarían la elección de Rodas, Villeda Morales quiso reaccionar, era ya demasiado tarde. Dentro del partido, nadie podía detener a un Rodas ensobrecido por la euforia con que los caciques y el populacho acogían su oratoria lírica, enajenado hasta el delirio en el que —para el deleite y con el aplauso de muchos— proclamaba desde tribunas públicas que bajo su mando los militares adelgazarían porque él los pondría a trabajar (“No cantar gloria”, decían sabiamente los antiguos, y “Por la boca muere el pez”). El Partido Nacional estaba en el nadir de su historia reciente. Pero se cuenta que poco antes de morir, Carías convocó a sus partidarios y les dijo, “Ahí les dejo el ejército, el ejército es su garantía”. Ricardo Zúñiga Agustínus había reorganizado el nacionalismo desbandado desde 1956 pero sabía que no podía ganar; buscó a los militares que lo estaban esperando y les propuso un pacto.

Otra vez los vientos habían cambiado. La revolución cubana había sorprendido y asustado al Departamento de Estado norteamericano, desatando una cacería de brujas comunistas. Se sabía, en efecto, que los progresistas del área habían formado una Liga del Caribe que tenía conexiones liberales. Pronto habría de morir asesinado el amigo personal de Villeda Morales, “Jack” Kennedy, y para el presidente norteamericano sucesor América Latina carecía de

importancia. Un día de tantos los militares hondureños anunciaron que la administración liberal estaba infiltrada por comunistas, masacraron a la Guardia Civil y le pidieron a Villeda Morales que abandonara el país unos meses antes de que terminara su periodo. Cuando el "Pájaro" le comunicó la noticia por teléfono, Rodas se sentó en un sillón, estupefacto e impotente, reducido a su verdadera fuerza. Unos cuantos jefes regionales se alzaron efímera e inútilmente, sin armas, mientras el pretendiente de caudillo se autoexilió a Costa Rica. Kennedy rompió relaciones con el gobierno golpista, y se propuso usar el caso como ejemplo y para mandar un mensaje a otros posibles golpistas latinoamericanos. El gobierno militar se tambaleó unos meses hasta que Johnson lo reconoció, le devolvió al embajador y le brindó ayuda como estaba previsto.

De entonces (1963) data la sucesión —larga de enumerar— de regímenes militares, legalizados más tarde o sucedidos por gobiernos "elegidos" en elecciones manipuladas, a su vez "golpeados" por otras "juntas", un periodo de casi 20 años al que nos referimos como el de la dictadura militar, ya que los militares conservaron siempre el poder, en última instancia, hasta 1982.

No obstante, habría que distinguir varias etapas en ese periodo. Durante la primera fase de la dictadura, Oswaldo López Arellano (golpista de 1954, para entonces ascendido a coronel) gobierna con cuadros y apoyo del Partido Nacional y con poca gloria, primero como triunviro, después como presidente elegido en las célebres "elecciones estilo Honduras", cuyos atropellos documenta ampliamente la prensa internacional. Por primera vez en la historia del país los militares amparan el fraude. Irónicamente, durante los primeros seis años de la dictadura, el jefe máximo del nacionalismo, Ricardo Zúñiga Agustinus, es el cerebro detrás del trono; la camarilla nacionalista gobierna en la práctica tras una mampara militar; los miembros del gabinete son prominentes nacionalistas; el poder militar es un vehículo.

La guerra con El Salvador precipita cambios internos en el orden militar, saca a la luz del sol los trapitos sucios y muestra la necesidad de que la milicia vuelva a los cuarteles. Quizá a cambio del apoyo a su periodo presidencial, López Arellano prometió entregarles el poder a los nacionalistas. Del modo que fuera, después de cumplir su "periodo constitucional", el general López convoca a nuevas elecciones. Para entonces, Rodas Alvarado ha regresado del exilio y pretende hacerse cargo nuevamente del Partido Liberal; pero los nuevos líderes que habían sostenido la organización partidista bajo la dictadura rechazan sus pretensiones, y Rodas ordena a sus fieles abstenerse de votar. Con un poquito de ayuda gana Ramón Ernesto Cruz, jurista desconocido para las bases nacionalistas, impuesto como candidato por dedazo de Zúñiga, y cuyo breve gobierno (1971-1972) representa una abortada transición a un régimen civil. Zúñiga Agustinus sigue siendo el poder detrás del trono, el jefe del partido que dicta la línea conservadora del gobierno.

Naturalmente, López Arellano es jefe de las fuerzas armadas "bajo" Cruz. Este último concibe el problema jurídico de la delimitación fronteriza como el principal y más urgente del país. Consecuentemente, resulta incapaz de comprender los problemas sociales en sus propios términos, o de resistir las presio-

nes sectoriales y partidistas, de modo que la situación degenera rápidamente. Cuando se cierne sobre el país una marcha de hambre campesina en protesta por la represión, López Arellano da su tercer golpe, ahora contra Cruz, con apoyo y en representación de los militares jóvenes que, para entonces, han formado —al margen de la ley— un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional.

Para retomar el poder, sin embargo, los militares necesitan una nueva justificación; el anticomunismo de 1963 ya no funciona. Aducen, para ese fin, la crisis social y la urgencia de darle una respuesta adecuada. Descubren entonces el populismo, de moda entre sus congéneres del Perú: la revolución desde el poder, la dictadura militar al servicio de los intereses populares —en vez de los oligárquicos— supuestamente representados por los partidos. Por lo demás, entre los oficiales de formación reciente del ejército hondureño —en contraste, por ejemplo, con el de Guatemala— predominan los de origen social bajo, de manera que es fácil para ellos identificarse de manera pragmática con los reclamos del pueblo. El consejo de oficiales le da al experto López Arellano un mandato para lanzar una serie de reformas populistas, y se inicia así la segunda fase de la dictadura. Zúñiga queda marginado. Sin desligarse totalmente del nacionalismo, el gobierno militar afecta intereses de sus partidarios no del todo contentos. Durante esta segunda etapa de la dictadura militar, López Arellano incorpora a sus cuadros a jóvenes técnicos y profesionistas, liberales y demócratas cristianos, que desesperan de la incapacidad de sus partidos y muestran vocación para el servicio público, aunque siguen prevaleciendo los colaboradores azules.

Las reformas populistas (decreto agrario, nacionalización de los bosques, nuevas reformas laborales) despiertan algún entusiasmo, especialmente entre profesores universitarios, estudiantes, religiosos, pero sobre todo consiguen el apoyo tácito de los líderes populares. Se articula así un gobierno que prescinde de los partidos. Pero muy pronto estalla el escándalo del *bananagate*,⁶ que rompe el absceso pestilente de la corrupción militar, fenomenal, sin precedentes en la nada limpia historia patria. Nadie puede seguir ignorando lo que casi todo el mundo sabe de antemano. La venalidad, que se había vuelto más bien rara desde tiempos de Carias (puritanos), se ha vuelto ahora el pan de cada día.

Los generales reciben sobornos millonarios, los coroneles cobran para permitir el contrabando de granos y ganado, los sargentos asaltan a conductores y transportistas en las carreteras. La idea con que muchos se consolaban de que “la dictadura ahorra el costo (formal e informal) de un Congreso haragán e innecesario”, se manifiesta entonces en todo el esplendor de su estupidez. En un gobierno sin ley, cada hombre armado puede resultar tan caro como un presidente corrupto. Para entonces, además, la reforma populista entra en franco retroceso. Sube luego al poder el general Juan Alberto Melgar Castro, nacionalista supuestamente honesto, quien gobierna procurando allegarse un

⁶ Así se denomina el descubrimiento de que el jefe de Estado y algún ministro compartieron un soborno millonario de una compañía bananera para que derogasen un impuesto a la exportación. La prensa hondureña publicó la documentación y precipitó la caída del gobierno.

apoyo civil corporativista, hasta que estalla el escándalo de los militares involucrados en el contrabando de drogas, y asume el mando entonces, precisa e increíblemente, uno de los inculpados, el general Policarpo Paz García. El desgaste de la dictadura militar es incontenible.

Los nuevos precios del petróleo no pueden pagarse cuando empiezan a bajar los de los productos de exportación propios. A partir de 1977, los militares recurren a préstamos cada vez más elevados y menos pagables para continuar con los programas de obras públicas que disfrazan la corrupción. El gobierno de James Carter presiona por una apertura democrática y, pocos meses antes de la caída de Somoza, "Polo" Paz convoca a elecciones para una constituyente que, a su vez, convocará otra para elegir un gobierno legal. Surgen por entonces los nuevos partidos, que se constituyen como tales formalmente y alcanzan una representación electoral por vez primera.

Las elecciones tienen que ser libres. Las expectativas son demasiadas y hay que deshacerse de la papa caliente que es el poder en tiempos de hambre. Ambos partidos tradicionalistas, sin embargo, empiezan a mostrar signos de tensión y agotamiento. El Nacional, que había provisto la base sociopolítica del régimen *de facto*, se ha acostumbrado a usufructuar el poder a la sombra de los fusiles, de modo que el retorno a la legalidad lo sorprende fuera de condición. No puede ya, bajo la égida de una pequeña camarilla, organizar las fuerzas necesarias para una batalla electoral limpia, o ha olvidado cómo hacerlo, y a último momento pretende, ingenua e inútilmente, subsistir esa habilidad importando tecnología electoral estadounidense (encuestas, análisis computarizado y métodos de propaganda). Con el fracaso, la hegemonía de la camarilla oficialista del partido azul se resquebraja.

Los liberales estaban apenas mejor preparados. En el primer periodo de la dictadura, los cuadros liberales lograron mantenerse activos, pese a la persecución sistemática. Entre 1965 y 1969 se procuró levantar la moral del partido, hacerlo tomar conciencia ideológica de su vocación progresista, reorientar su organización en un sentido más moderno. Se habló de "izquierda democrática" cuando eso era valiente. Pero la vieja red caciquil bajo el mando de Rodas conservó su influencia, especialmente en el ámbito rural, y sabotó los proyectos renovadores boicoteando las elecciones. Los nuevos líderes y proyectos liberales sufrieron un descalabro definitivo con las sucesivas elecciones fraudulentas de López Arellano y Ramón Cruz, favorecidas por el boicot rodista. En medio de una desorganización casi completa, el partido, como institución, cayó una vez más bajo el control de Rodas Alvarado. Con todo y el nuevo tono reconciliador que le imponen sus descalabros pasados, Rodas sigue siendo, en 1980, el caudillo autoritario y prepotente de siempre. A su alrededor se alinean sólo los obsequiosos y serviles o los oportunistas y cínicos. Pero los líderes jóvenes terminan por aceptar su popularidad y se unen para elegir la constituyente. En 1981 "ganan" los liberales, unidos en torno al imperativo de recuperar el poder y favorecidos por un voto de protesta contra la alianza militar-nacionalista.

El triunfo premia e impulsa el proceso de unificación liberal. Muerto Ro-

das, el partido parece estar en el umbral de un nuevo auge. En apariencia, el periodo de la dictadura ha terminado. La constituyente convoca a elecciones directas de presidente y Congreso, que se realizan en 1982 y llevan al poder al actual gobierno liberal del presidente Suazo Córdova, con un mayor margen de ventaja que en la elección de 1981, ya que el PINU (facción separada del Partido Nacional) logra aumentar en decenas de miles sus votos independientes. Pero casi de inmediato se agudizan también las riñas entre las diversas facciones liberales, y con las *vendettas* políticas y marginaciones, se impone el signo del desencanto. Dos años después la situación ha cambiado radicalmente. Ambas viejas máquinas políticas (la nacionalista y la liberal) parecen estar a punto de desintegrarse en marcha. Los partidos viejos parecen agotados e incapaces ya de regenerarse; ninguno de los nuevos rebasa la condición lamentable de organización de cuadros o partido de células; son órganos desconectados del cuerpo social. La crisis del sistema político rebasa el ámbito partidista y alcanza al Estado, que se debilita con las arbitrariedades de los jueces y soldados y los escándalos en el gabinete y el Congreso. Urge, pues, diagnosticar el mal.

EL DIAGNÓSTICO

La tendencia general ha sido culpar a esta o aquella persona o grupo de personas, cuyo comportamiento inadecuado sin duda ha tenido repercusiones. Se ha hablado también —obscuramente— de la necesidad de substituir los “modelos políticos” obsoletos, como si se tratara de un problema de voluntad. Me atreveré a sugerir, sin embargo, que el problema es más profundo. Los síntomas y sus causas inmediatas están a la vista.

Al mismo tiempo que deslavó las bases orgánicas tradicionales de los partidos, marginándolos del poder efectivo, la dictadura militar (especialmente en su última etapa de 1972 a 1980) reforzó el caciquismo dentro de los mismos, retrasando su modernización e impidiéndoles captar la fuerza de los nuevos sectores sociales. (De hecho, el estamento militar asumió en el proceso un carácter político sobre la base de estos nuevos sectores, carácter del que está muy lejos de haberse despojado.) Así, el comportamiento disfuncional de los caciques políticos se agudizó a la vez que éstos perdían verdadera fuerza, y en particular perdieron la popularidad que otrora los justificara. Aun cuando Cruz llega a ser presidente, por ejemplo, funciona sólo como el representante de una camarilla; el Partido Nacional en su conjunto queda marginado y descontento. Igual sucede ahora con Suazo Córdova, sucesor de Rodas en la cúpula del oficialismo liberal. Dentro de los partidos, el descontento se plasma en movimientos internos disidentes. Sin embargo, pocas de estas organizaciones —resultados al fin y al cabo de pleitos de familia— logran aglutinar fuerza propia y estructurar cuadros operativos; la mayoría son efímeros movimientos de sobremesa con muchas siglas y planteamientos elegantes, pero sin bases reales. De cualquier modo hay fisión, disolución del sistema partidista. Surge un

problema de credibilidad. La gente deja de creer en partidos que se disuelven en la oposición y que se desprestigian en el poder, y como no hay nadie más que pueda asumir el mando, el orden público termina amenazado. La debilidad de los partidos se traduce en una pérdida de representatividad y de legitimidad del Estado que los militares aprovechan. Urgidas de soluciones efectivas a sus problemas inmediatos, las organizaciones populares llevan sus conflictos y disputas a los jefes militares. Éstos comienzan por hacer pronunciamientos subidos de tono, proceden a autoerigirse en mediadores forzosos en sustitución del gobierno, y terminan conspirando contra el Estado.

La gravedad y hondura de la crisis política nos remite a una inadecuación estructural entre la naturaleza de los partidos tradicionales —tercas y caprichosas redes de caciques— y el desarrollo actual del Estado y la sociedad, modernizados aceleradamente en el último medio siglo. Esta inadecuación impide, por un lado, que los caciques funcionen bien como gobernantes, e inhibe, por otro, el surgimiento de otro tipo de liderazgo político, prolongando una situación de *impasse* y creando un vacío de poder en el que han prosperado únicamente la fisión organizativa, la debilidad de las instituciones y el golpismo.

Nada se gana con burlarse del partido tradicional; al calificarlo de anticuado, se comete un pleonasma. La red de caciques regionales que conforma un partido ha sido una estructura orgánica; surgió históricamente de circunstancias concretas dentro de las cuales era funcional. Hay que entender las funciones originales de ese tipo de organización antes de comprender la evolución gradual de sus disfunciones. Este tipo de estructura —el caciquismo— subsiste hoy en los movimientos disidentes dentro de los viejos partidos y en los llamados nuevos partidos hondureños, que son en realidad viejos movimientos frustrados y divorciados del partido materno. Todas las organizaciones políticas hondureñas, aun las clandestinas, son fundamentalmente caciquiles, pese a las vehementes protestas de varios “líderes” de haber superado los personalismos y al margen de sus elaboradas, si bien inconsistentes o dogmáticas lucubraciones ideológicas. Sólo si logramos comprender cómo operan las relaciones intergrupales e interpersonales en estas hermandades de caciques, podremos entender en alguna medida los procesos de fisión y fusión que las conforman y destruyen, los resultantes arraigos regionales de las diversas organizaciones políticas, las jerarquías formales que las caracterizan, las prioridades de sus luchas y su posible proyección o decadencia. Me propongo, por lo mismo, analizar más de cerca, y como un ente abstracto, la estructura más compleja que es el partido tradicional hondureño.

Resulta difícil deslindar las diferencias sociales entre un partido tradicional y otro. Aunque los liberales gozan, por razones históricas, de más arraigo entre los obreros costeños, mientras que los nacionalistas predominan entre los campesinos más tradicionales del interior, ambas organizaciones son dirigidas —a escala nacional— por destacados burgueses y terratenientes ricos y poderosos; sus cuadros regionales están compuestos en ambos casos por medianos propietarios y comerciantes, rancheros y transportistas que realizan tareas clave de control económico. En ambos casos también, las bases partidis-

tas fundamentales son forzosamente campesinas, como la gran mayoría de la población. Ambos partidos representan, pues, cortes transversales de la sociedad hondureña, si bien con diferentes proporciones de los diversos sectores sociales. Sin duda por eso los partidos azul y rojo, que históricamente se han encargado de redactar las constituciones del país, han prohibido en las leyes sucesivamente proclamadas y desbancadas la creación de partidos clasistas que intenten aprovechar las divisiones sociales o representar los intereses de un sector. La formación de un partido obrero o campesino amenazaría a sus propias bases. En parte por esa prohibición y en parte porque el electorado se alinea todavía con uno u otro partido en función de la tradición familiar, los sectores sociales pobres no han intentado formar tales partidos. Aunque debe reconocerse que desde hace varios años las organizaciones campesinas y sindicales juegan su influencia en la arena política con mucha eficacia.

Tampoco son los partidos organizaciones diferenciadas en términos ideológicos. Los liberales dicen estar comprometidos con una actitud más abierta al cambio y han gozado fama de ser más dinámicos, de estar dispuestos a ensayar nuevas soluciones. Ni menos ilustres, ni menos amigos de un progreso seguro, sus contrarios los nacionalistas alegan ser más prudentes, y defienden el *status quo* contra experimentos dudosos y racionios no demostrados. Pero los liberales de la actualidad muestran tan poca liberalidad, como poca conciencia nacional y sentido patriótico los nacionalistas. Estos últimos a menudo confunden los intereses nacionales con los suyos propios —de clase— y con la conservación de un mercado cautivo. Su tradicionalismo conservador no tiene nada que ver con una auténtica defensa de valores propios, nacionales. Por su lado, los liberales de hoy manifiestan escaso respeto por las libertades económicas y cívicas en que teóricamente se basa su ideario. No conservan un liberalismo clásico ni proponen un liberalismo social actualizado. Y el miedo-compromiso liberal con el cambio flaquea siempre que éste parece exigir transformaciones en las estructuras partidistas. Unos y otros adoptan, pues, políticas dirigidas, más que otra cosa, a promover los intereses particulares de sus camarillas de caciques. Las ideologías de los partidos se definen fundamentalmente respecto a la relación del país con sus vecinos. Los liberales, cuyos ancestros decimonónicos fueron unionistas, favorecen la integración regional; los nacionalistas, cuyo símbolo es “la estrella solitaria”, se muestran más recelosos de los vecinos. Más allá de estas actitudes, es difícil distinguir entre los proyectos ideológicos o programas de los dos viejos partidos.

Ambos en realidad son clanes de caciques que giran bajo un cabecilla principal o capo, cuya característica esencial es la de tener una personalidad fuerte. Son hermandades de caudillos que operan de acuerdo con un código social tradicional de fidelidad personal. De hecho, la “lealtad” personal es al parecer la virtud cívica suprema entre los políticos hondureños. Por eso los movimientos políticos se apellidan con los nombres de sus líderes: rodista, zuñiguista, Movimiento Nacional Rafael Callejas, reinista. La lealtad es, desde luego, un valor hermoso. Pero hay, además de la lealtad a un líder o a un patrón, la lealtad a uno mismo, a los principios o creencias con que uno se

guía, a las instituciones y a la comunidad; estas múltiples lealtades a menudo entran en conflicto. El partido tradicional coloca la lealtad personal al “líder” por encima de las demás. Es por eso, y no sólo por incultura política o desconocimiento vergonzoso de los rudimentos de la teoría del Estado, que las autoridades del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia —supuestamente poderes independientes— proclaman repetida y públicamente su lealtad al presidente.

El partido tradicional es una estructura muy primitiva, que surgió de las también primitivas condiciones económicas y relaciones sociales del siglo pasado.⁷ Así, la agrupación política resulta ser un pacto entre señores o, para usar el término campesino con que se caracteriza a los caudillos locales, una alianza de “empautados”, una especie de asociación mafiosa que multiplica el poder mágico de los cabecillas y garantiza protección a sus clientes, un “pauto” que institucionaliza en la dimensión política el poder económico del que gozan los signatarios.

Hasta hace poco, incluso se conservaba la costumbre del “voto personal”, que entregaba el cacique a los suyos personalmente para que lo depositaran en la urna a toda costa. Un ciudadano podía recibir varios, pero sabía que sólo uno era el bueno. El cliente (a quien se había confiado este voto, de cuyo poder mágico dependía la fuerza protectora de su patrón laico) lo escondía donde fuese necesario para protegerlo de las “comisiones” de caudillos rivales que resguardaban el paso de un cacicazgo a otro rumbo a la cabecera donde se celebraba la votación, y ahí lo depositaba en la urna como quien cumple una manda. De la cantidad de votos que “entregaba” dependía, a su vez, el *status* del caudillo local entre los de su región y frente a los caciques nacionales que rodeaban al gran jefe; de esa cantidad dependían, pues, su influencia y su capacidad para obtener favores, prebendas y consideraciones, con las que luego podía proteger y premiar a su clientela. Así funcionaba el sistema; expresaba, con cierta eficacia, formas de reciprocidad y solidaridad social.

Las organizaciones políticas nacionales articulaban varias redes de caciques regionales, ligados a su vez a los cacicazgos locales en una pirámide en cuyo vértice estaba “el líder” en turno y cuya base la formaba la clientela popular de los hombres ricos locales. En cada vallecito, en cada aldea y en cada barrio antiguo había uno o dos caciques locales campesinos —de ordinario con pistola y malos modos— ligados a un patrón, un hacendado o un comerciante del municipio o ciudad más cercana. Estos patronos o caciques regionales se disputaban —como candidatos a diputados— los votos de la clientela local en las elecciones para el Congreso; los exitosos elegían a su vez una cúpula partidaria, y el caudillo que lograra incorporar a su red el mayor número de estos electores informales (patronos electos diputados) podía aspirar a la presidencia. Aunque con grandes diferencias intelectuales y morales entre ellos, don Miguel y don Policarpo Bonilla, el general Carías y el doctor Paz Barahona,

⁷ En ese entonces, los hacendados más fuertes se encargaban de mercadear el producto de sus vecinos, de sus compadres y de los campesinos independientes junto con el suyo propio, como en la época colonial, actuando a la vez como representantes, financistas e intermediarios.

los Reina y los Callejas de hace medio siglo, Juan Manuel Gálvez y Villeda Morales, por mencionar sólo a los difuntos, no fueron buenos ni malos, ni héroes ni villanos; fueron caudillos que se disputaron el puesto de capo principal de la tribu, representando a bandas de estos jefes locales que eran sus compadres, cuando no sus parientes por afinidad o consanguinidad. Dejemos a un lado los problemas históricos que acarreó este sistema político: el ofuscamiento o fanatismo sectario, la subordinación de la ley, la consecuente inestabilidad, la ignara mediocridad de muchos líderes medios que no debían competir más que en un círculo poco ilustre de cabecillas rurales, la brutalidad y la violencia a las que recurrieron éstos sin escrúpulos, los exclusivismos y la manera en que el sistema reprodujo la desigualdad social y desperdió recursos.

El problema actual radica en el proceso mediante el cual aquella sencilla sociedad agraria del siglo XIX se volvió más compleja, comenzó a organizarse y a polarizarse, cristalizando grupos y clases sociales nuevos. La tardanza de la modernización económica y los eventuales intentos de adaptarse a ella (el reformismo y el populismo) retardaron, en Honduras, la crisis del sistema social y político. Pero una vez que se ha puesto en marcha el proceso de modernización, por su naturaleza crea fuerzas sociales que quedan fuera de la esfera de influencia de los caciques, al tiempo que resta fuerza a los vínculos y apoyos del cacicazgo. Este proceso se ha acelerado notablemente en el último medio siglo sin que las redes de caciques —que llamamos partidos— se adapten o adecuen al cambio y a las nuevas situaciones, provocando la falta de correspondencia entre sistema político y estructura social. Así, las fuerzas sociales nuevas se tornan disolventes o disgregadoras del sistema por el hecho mismo de quedar marginadas. El caciquismo sigue vigente pero ya no funciona. Los nuevos sectores sociales organizados en forma moderna (centrales campesinas, sindicatos obreros, asociaciones de empresarios) tienen ligas con el sistema partidista, aunque a menudo marginales. Participan con un papel menor en las negociaciones cotidianas mediante las cuales se ejerce el poder, pero no obtienen satisfacción a sus demandas sistemáticas y, dado su peso real y creciente en la sociedad actual, resienten más su relativa marginación del sistema político tradicional y se dejan seducir por la “eficiencia” de la mediación militar.

Por otra parte, dada la nueva complejidad del Estado, los caciques no pueden obtener la retroalimentación que necesitan para mantener engrasada y disciplinada su maquinaria política. Aun desde el cargo gubernamental, el cacique queda aislado de su clientela por la administración civil, que se encarga de los servicios estatales. Mientras el cacique trata de darle la vuelta a los procedimientos y a la burocracia, ésta lo ve con suspicacia, cuando no con franca animadversión. Los caudillos conservan, sin embargo, suficiente fuerza electoral y control organizativo (de los partidos tradicionales) como para impedir la estructuración de una maquinaria alternativa y, por lo mismo, el surgimiento de partidos nuevos. En consecuencia, todo el tiempo hay enfrentamientos, percepciones e interpretaciones antagónicas de los servicios y beneficios que otorga el Estado a unos y otros, y existe descontento generalizado pero incapaz de cristalizar en forma institucional.

La disolución partidista se acelera a medida que se amplifica y profundiza la brecha entre las instituciones tradicionales y la constitución real de la sociedad política. Pero la cúpula del sistema partidista insiste en que las cosas sigan iguales y parece demasiado preocupada por los problemas cotidianos para contemplar el proceso. No es, desde luego, que se trate de algo muy novedoso o difícil de percibir. Villeda Morales percibió claramente este proceso de cambio sociopolítico y procuró captar la fuerza del desarrollo social moderno. El reformismo populista de los militares intentó a su manera hacer lo mismo. Y los actuales partidos nuevos y sus movimientos internos apuestan a lo incontenible del proceso evolutivo. Pero el hecho es que hasta ahora ningún movimiento político ha conseguido formarse, en función de esta tendencia moderna y al margen de los partidos tradicionales, su propia base política independiente. Mientras nadie lo consiga, la esperanza del cambio político retrocede y se disipa. De manera que el sistema en su conjunto parece estar suspendido entre un pasado irrecuperable y un futuro que exige adaptaciones improbables.

Esta historia tiene, entre otras, una moraleja destacable. Hasta ahora, los partidos tradicionales se han dividido entre ellos el electorado por mitades muy parejas, que se inclinan hacia uno u otro lado dependiendo de muchas circunstancias, pero sobre todo del funcionamiento más o menos efectivo de la maquinaria partidista. Este último factor (la eficiencia institucional) ha dependido principalmente de la unidad de cada partido, del consenso entre los líderes. Las divisiones dentro de los partidos han cristalizado desde los años veinte en movimientos internos con diversos grados de formalidad, en candidaturas múltiples de un solo partido o en efímeros partidos de coyuntura (el PUN) que, sin conseguir nada para sí, debilitan al partido materno sistemáticamente, al grado de otorgarle al partido rival un triunfo derivado.

Hoy día se presenta una situación sin precedentes. Ambos partidos tradicionales se hallan fraccionados. El partido liberal está dividido entre una mayoría rodista (fraccionada a su vez entre oficialistas y disidentes) y dos minorías sustanciales, la de la Alianza Liberal Popular (ALIPO) y la del Movimiento Liberal Democrático Revolucionario (MLIDER). El Partido Nacional está dividido entre los tradicionalistas, todavía bajo el encanto de Zúñiga Augustinus, el Movimiento Unidad y Cambio, ahora en control de la institución, y el MONARCA o Movimiento Nacional Rafael Callejas (ex-ministro de la dictadura y heredero de una tradición partidista de abolengo), sin que se sepa bien quiénes son mayoritarios entre las bases y sin contar otros movimientos pequeños, asociados a los militares, que tienen pocas probabilidades de desarrollo. Las riñas entre las facciones disidentes y las organizaciones partidarias son tan profundas que, al menos entre los liberales, se habla ya de formar nuevos partidos o alianzas con los partidos nuevos reconocidos (PINU y DC), alianzas que por primera vez pondrían a estos nuevos personajes en posición de competir por el poder con los restos disminuidos de los partidos tradicionales. Dividido, ninguno de los partidos tradicionales puede hacerse del gobierno, ni mucho menos accederá al poder.

Si bien el bipartidismo parecía tan sano como siempre hace apenas tres

años, hoy su paso a la historia parece inminente. La esperanza de un progreso radica esencialmente en dos factores: el despegue popular de los nuevos movimientos o la profunda reforma interna (revolución desde adentro) de los partidos tradicionales. Ninguno de los dos es previsible. Desde luego que, si las facciones actualmente en control de las organizaciones partidistas llamaran a la unidad con los hechos, compartiendo la dirección partidaria, abriendo sus convenciones, dialogando y transigiendo con los disidentes, los partidos tradicionales podrían todavía resurgir y recomponer su fuerza original. Pero esa cadena de suposiciones parece sumamente improbable a estas alturas, especialmente cuando privan, entre todos, la mentalidad caciquil poco inclinada al diálogo y la actitud triunfalista de los hombres fuertes. Los caudillos siguen pensando que un poder compartido con gente que no sea su seguidora no es poder, y cada uno sobreestima inmensamente la fuerza electoral de su propia camarilla. Los caciques disminuidos de fines del siglo XX parecen estar preparando todo para ofrecernos en breve el espectáculo de un sangriento combate autoaniquilador del que sólo han de salir vivos los espectadores más cautos. Los jefes militares ya ocuparon sus butacas en los palcos. En el acto final se puede esperar que sucumba el sistema político, cuya legitimidad le había dado al país una semblanza de paz social. Y entonces también Honduras se incorporaría a la dinámica de la crisis en que están inmersos sus vecinos.